



Ministerio de Ambiente,
y Desarrollo Sostenible



Barranquilla; 04 OCT 2018

SGA E-006407

Señores
ACONDESA S.A. – GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA
ÁLVARO COTES MESTRE
Representante legal
Carrera 30 N° 28 A – 180
Soledad - Atlántico

Referencia: AUTO N° 00001516 DE 2018

Le solicitamos se sirva comparecer a la Subdirección de Gestión Ambiental de ésta Corporación, ubicada en la Calle 66 N° 54 – 43 Piso 1°, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio para que se notifique personalmente del acto administrativo de la referencia. De conformidad con lo establecido en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, se surtirá por AVISO acompañado de copia íntegra del acto administrativo en concordancia con el Artículo 69 de la citada Ley.

Atentamente,

LILIANA ZAPATA GARRIDO
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Exp: 1201-125
Proyectó: J. Soto Ariza – Abogada Contratista Subdirección de Gestión Ambiental
Supervisora: Amira Mejía Barandica – Profesional Universitario



REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 000 015 16' DE 2018

“POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO”.

La suscrita Subdirectora de Gestión Ambiental, de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, C.R.A, con base en lo señalado en el Acuerdo N° 0015 del 13 de octubre de 2016, expedido por el Consejo Directivo de esta Entidad, en uso de las facultades constitucionales y legales conferidas por la Resolución N°583 de 18 de Agosto de 2017, expedida por esta Entidad, teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Ley 1437 de 2011, Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que por medio de Resolución N° 00534 del 15 de Julio 2011, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A., otorgó una Concesión de Aguas y estableció el cumplimiento de unas obligaciones ambientales a la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, identificada con Nit. 890.103.400-5, ubicada el Municipio de Polonuevo – Atlántico, representada legalmente por el Señor ÁLVARO COTES MESTRE.

Que el señalado acto administrativo fue notificado personalmente el 12 de Septiembre de 2011.

Que mediante Auto N° 0097 del 25 de Febrero de 2013, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A., solicitó unos requerimientos a la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, identificada con Nit. 890.103.400-5, ubicada el Municipio de Polonuevo – Atlántico.

Que el señalado acto administrativo fue notificado personalmente el 06 de Mayo de 2013.

Que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A. mediante Auto N° 00537 del 14 de Agosto de 2014, inició un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, por el presunto incumplimiento de los requerimientos solicitados mediante Auto N° 0097 del 25 de Febrero de 2013, y la normatividad ambiental vigente, en este caso, el literal g) y k) del artículo 62, del Decreto 1541 de 1978 y, finalmente, artículos 10, 11 y 12 del Decreto 4741 de 2005 (actualmente, Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”).

Que el señalado acto administrativo fue notificado personalmente el 29 de Agosto de 2014.

Que una vez iniciado el procedimiento sancionatorio ambiental se hace imperioso ejecutar labores de verificación de los hechos, tal como lo ordena el artículo 22 de la ley 1333 de 2009, que señala “*La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios*”

Jacul

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 00001516 DE 2018

**"POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO"**.

En procura de alcanzar esa constancia probatoria, esta Corporación revisó sus archivos encontrando el expediente N° 1201-125, perteneciente al seguimiento y control ambiental a la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, identificada con Nit. 890.103.400-5, ubicada el Municipio de Polonuevo – Atlántico.

En este orden de ideas, se denota un presunto incumplimiento del literal g) y k) del artículo 2.2.3.2.9.9 (Acto administrativo que otorga la Concesión de Aguas); artículo 2.2.6.1.3.1 (De las obligaciones y responsabilidades, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos), artículo 2.2.6.1.3.2 (Responsabilidad del generador) y, finalmente, el artículo 2.2.6.1.3.3 (Subsistencia de la responsabilidad) del Decreto 1076 de 2015, sobre el cual se hizo caso omiso a las normatividad ambiental vigente, sirviendo esto de soporte para formular pliego de cargos.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL

- De la competencia de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A.

La Ley 99 de 1993, estableció al interior de su articulado las competencias de las distintas autoridades ambientales que conforman el Sistema Nacional Ambiental SINA, y de igual forma señaló la jurisdicción de cada una de ellas, en aras de delimitar territorialmente sus competencias.

Así entonces el Artículo 23 de la Ley anteriormente mencionada preceptuó: *"Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente"*.

Aunado lo anterior, el Artículo 33 señala: *"La administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales. (...) Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A.: Con sede principal en la Ciudad de Barranquilla; su jurisdicción comprenderá el Departamento de Atlántico"*.

Por otro lado, puede señalarse que la Ley 99 de 1993, *"Por la cual se crea el Ministerio del medio ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones"*, establece en su artículo 31, las funciones de las Corporaciones, consagrando en el numeral 17, lo siguiente:

Jaciel

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 00001516 DE 2018

"POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO".

"Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación de las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables, y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados".

Adicionalmente, la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los Artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Primero de la Ley 1333 de 2009: *"El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".*

Que de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo del Artículo Segundo de la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de la facultad a prevención, *"En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. (...)".* (Negrita y Subrayado fuera del texto original)

Que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, *"(...) a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas."*¹

Ahora bien, teniendo en cuenta que corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A., efectuar el seguimiento y control ambiental a la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, resulta ser esta la entidad llamada a iniciar, adelantar y culminar el procedimiento sancionatorio ambiental contemplado en la Ley 1333 de 2009, de conformidad con las normas descritas en líneas anteriores.

¹ Sentencia C-818 de 2005

Baschi

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 00001516 DE 2018

"POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO".

- De la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

La Constitución Política de Colombia, considerada como una Constitución prevalentemente ecológica, indica que la protección ambiental constituye un deber, que exige por parte de las autoridades y de los particulares acciones tendientes a su conservación y protección. (Art. 80 CN). Adicionalmente se estableció que la potestad sancionatoria en materia ambiental al señalar como deber del estado el "imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños".

La Corte Constitucional, se ha pronunciado en relación con la conservación y protección del ambiente, señalando en Sentencia T-453 del 31 de Agosto de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de este mundo natural, temas que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortar a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y desarrollo".

En este sentido, el Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, señala en su articulado la obligación del estado y los particulares de preservar el medio ambiente y los recursos naturales al ser estos patrimonio común de la humanidad.

- FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009: *FORMULACION DE CARGOS "Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.*

Jepel

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 000 015 16 DE 2018

**“POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO”.**

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.”

Que en relación con el Auto de formulación de cargos, la Corte Constitucional en sentencia T- 418 de 1997, señaló:

“El auto de formulación de cargos es una providencia de trámite que sienta los cimientos sobre los cuales se edifica el proceso disciplinario destinado a establecer la responsabilidad disciplinaria del inculpado, de modo que el órgano titular del poder disciplinario fija en aquélla el objeto de su actuación y le señala al imputado, en forma concreta, cual es la falta disciplinaria que se le endilga a efecto de que pueda ejercer su derecho de defensa. Con miras a no obstaculizar el ejercicio del poder disciplinario, que tiende a asegurar la moralidad, la ética y la eficiencia en los servicios administrativos y la conducta recta de los servidores públicos”

Que de la normatividad y la jurisprudencia anteriormente descrita encontramos que el Auto de formulación de cargos es posible considerarlo como el núcleo del proceso investigativo como quiera que el mismo tiene como finalidad establecer la responsabilidad del inculpado, señalándole a este de forma concreta la falta en que incurrió en aras de que pueda ejercer efectivamente su derecho de defensa.

- DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA.

Teniendo en cuenta que la Ley 1333 de 2009, establece en su Artículo 24 lo referente a la Formulación de Cargos al interior del procedimiento sancionatorio ambiental, señalando que, en dicho Acto Administrativo deberán consagrarse expresamente e individualizarse las acciones u omisiones que constituyen la infracción ambiental, so pena de evitar ambigüedades y posteriormente la declaratoria de nulidades al interior de los procesos sancionatorios, resulta pertinente por parte de esta Entidad entrar a describir y determinar a ciencia cierta la conducta investigada.

Para ello, esta Autoridad Ambiental, procederá a determinar cada una de las conductas que presuntamente violan las normas ambientales, indicando de esta forma las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjeron los hechos que dieron lugar a la transgresión o presunta falta, y posteriormente establecerá cuales fueron en concreto las normas presuntamente violadas.

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1076 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

De la revisión del expediente N° 1201-125, perteneciente al seguimiento y control ambiental efectuado por parte de esta autoridad ambiental a la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, referente al cumplimiento de los requerimientos realizados mediante Auto N° 0097 del 25 de Febrero de 2013, resulta necesario indicar que el Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente:

Japal

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 00001516 DE 2018

“POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO”.

“Artículo 2.2.3.2.9.9 Acto administrativo:

La autoridad ambiental competente consignará en la Resolución que otorga Concesión de Aguas, por lo menos los siguientes puntos:

- a. Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
- b. Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
- c. Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van a derivar las agua;
- d. Cantidad de aguas que se otorga, uso que se va a dar a las aguas, modo y oportunidad en que se hará el uso;
- e. Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
- f. Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
- g. Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto - Ley 2811 de 1974;
- h. Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario.
- i. Cargas pecuniarias;
- j. Régimen de transferencia a la autoridad ambiental competente, al término de la concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
- k. Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y l. Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

(...)

Que en lo concerniente al PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, el Decreto en mención indica:

Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador:

De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe:

- a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera;
- b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental;
- c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el del presente TÍTULO sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario;

haya

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 00001516 DE 2018

“POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO”.

- d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;
- e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;
- f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el presente Título
- g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello;
- h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación.
En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos que se expidan en la reglamentación única para el sector del Interior por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio;
- i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años;
- j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos;
- k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

(...)

Artículo 2.2.6.1.3.2 Responsabilidad del generador:

El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.

Artículo 2.2.6.1.3.3 Subsistencia de la responsabilidad:

La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.

(...)

Japal

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 00001516 DE 2018

“POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO”.

Bajo esta óptica, es preciso señalar que con la actividad ejecutada por parte del presunto infractor, presuntamente se vulneraron normas ambientales, relacionadas con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

Así entonces, puede señalarse que nos encontramos frente a una conducta omisiva, toda vez que es evidente la inobservancia de la normatividad ambiental, puntualmente lo señalado en los artículos anteriormente mencionados en el presente proveído.

En los anteriores términos, quedan descritas e individualizadas las conductas que dan mérito para continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra de la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, identificada con Nit. 890.103.400-5, garantizando a la misma el cumplimiento de debido proceso y su derecho de defensa.

MODALIDAD DE CULPABILIDAD

De acuerdo a lo contemplado en la Ley 1333 de 2009, el legislador colombiano estableció la presunción de dolo o culpa en materia ambiental, teniendo en cuenta las características del bien jurídico protegido, en este caso, el medio ambiente, lo anterior significa que corresponde al investigado probar que no incurrió en la falta que se le imputa, sin que ello signifique la violación por parte de las Autoridades Ambientales de los Derechos de contradicción o Debido Proceso.

Lo anterior ha sido señalado por la Corte Constitucional en cuantiosa jurisprudencia, entre las que se destacan la Sentencia C- 595 de 2010, en la cual manifiesta lo siguiente:

“La Corte reitera su jurisprudencia constitucional en orden a señalar que el principio de presunción de inocencia es aplicable como criterio general en el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, la rigurosidad en su aplicación, propia del ámbito del derecho penal, no es trasladable in toto -con el mismo alcance integral- al derecho administrativo sancionador, dada la existencia de diferencias entre los regímenes (naturaleza de la actuación, fines perseguidos, ámbitos específicos de operancia, etc.), que lleva a su aplicación bajo ciertos matices o de manera atenuada (ámbito de la responsabilidad subjetiva). Incluso, excepcionalmente, podría establecerse la responsabilidad sin culpa (objetiva)”. Sentencia C- 595 de 2010

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que las conductas descritas encajan dentro de violación a la normatividad ambiental, la cual puede ser por acción o por omisión, así entonces en el caso que nos ocupa nos encontramos frente a conductas omisivas, entendidas estas como *“se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido por parte de quien tiene a su cargo el deber de atender una prohibición o condición para el uso de los recursos naturales renovables o del medio ambiente, como por ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en una concesión u olvidar la presentación de los informes requeridos por la autoridad ambiental”².*

² Nuevo Regimen Sancionatorio Ambiental. Universidad Externado de Colombia.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 000 015 16 DE 2018

“POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO”.

De lo anotado, puede concluirse que la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, identificada con Nit. 890.103.400-5, presuntamente se encontraba incumpliendo las disposiciones en torno a lo estipulado en los anteriores considerandos; en este orden de ideas, la actividad ejecutada no contó con los mecanismos ambientales necesarios, así como tampoco, se puede garantizar a cabalidad la preservación y conservación del medio ambiente. Así entonces, los cargos serán imputados a título de dolo, teniendo en cuenta las características de la omisión de las normas.

Que teniendo en cuenta lo manifestado en acápites anteriores y siguiendo el procedimiento contemplado en la Ley 1333 de 2009, es procedente formular cargos a la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, por el presunto incumplimiento al literal g) y k) del artículo 62, del Decreto 1541 de 1978 y, finalmente, artículos 10, 11 y 12 del Decreto 4741 de 2005 (actualmente, Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”), y la presunta afectación y/o daño ambiental a los recursos naturales.

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE

PRIMERO: Formular el siguiente Pliego de Cargos a la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, identificada con Nit. 890.103.400-5, ubicada el Municipio de Polonuevo – Atlántico, representada legalmente por el Señor ÁLVARO COTES MESTRE o quien haga sus veces al momento de la notificación, toda vez que existe suficiente mérito probatorio para ello:

CARGO PRIMERO: Presunto incumplimiento de las disposiciones contempladas en el Auto N° 0097 del 25 de Febrero de 2013, expedido por esta autoridad ambiental, en el cual se establece el cumplimiento de unas obligaciones, entre esas: Presentar las caracterizaciones de las aguas captadas de los pozos profundos, así como también, los reportes de los volúmenes de agua captadas mensualmente para aplicar la tasa por uso, con base en el caudal reportado.

CARGO SEGUNDO: Presunto incumplimiento de las disposiciones contempladas en el Auto N° 0097 del 25 de Febrero de 2013, expedido por esta autoridad ambiental, respecto a la disposición final de todo tipo de residuos generados durante la actividad de explotación de cría y levante de cerdos.

SEGUNDO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Dentro de lo diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, la empresa ACONDESA S.A. – Propietaria de la GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, identificada con Nit. 890.103.400-5,

Jared

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A.

AUTO N° 00001516' DE 2018

“POR EL CUAL SE FORMULAN CARGOS EN CONTRA DE LA EMPRESA
ACONDESA S.A. - GRANJA PORCÍCOLA VILLA CLARITA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE POLONUEVO - ATLÁNTICO”.

ubicada el Municipio de Polonuevo – Atlántico, representada legalmente por el Señor ÁLVARO COTES MESTRE o quien haga sus veces al momento de la notificación, podrá presentar los respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

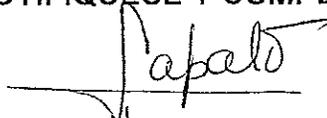
QUINTO: Practicar las pruebas necesarias y conducentes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de infracción a las normas sobre protección ambiental.

PARAGRAFO: La totalidad de los costos que demande la práctica de prueba serán a cargo de la parte solicitante.

SEXTO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, y para efectos del trámite de las peticiones de intervención aplicar el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Barranquilla a los 03 OCT. 2018

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



LILIANA ZAPATA GARRIDO
SUBDIRECTORA GESTIÓN AMBIENTAL

Exp: 1201-125

Proyectó: J. Soto Ariza – Abogada Contratista Subdirección de Gestión Ambiental

Supervisora: Amira Mejía Barandica – Profesional Universitario